

Jorge E. Brenna B. y Francisco Carballo E.  
(coordinadores)

# América Latina: de ruinas y horizontes

La política de nuestros días,  
un balance provisorio



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA  
UNIDAD XOCHIMILCO División de Ciencias Sociales y Humanidades

## El Chile de las movilizaciones: ¿giro a la izquierda o catarsis antisistémica?

Claudia Heiss

El movimiento social liderado por estudiantes secundarios en el año 2006 comenzó a evidenciar un cambio en la política chilena. El llamado “pingüinazo” –por los uniformes que hacen parecer pingüinos a los escolares chilenos– presagió una oleada de acción colectiva que a partir de abril de 2011 movilizó a miles de hasta entonces apáticos ciudadanos por temas como la calidad y gratuidad de la educación, el medio ambiente, los derechos de minorías sexuales e indígenas y las condiciones de vida en regiones extremas.

La despolitización y el individualismo habían caracterizado a los jóvenes de la década de los noventa del siglo xx, una generación que el tenista Marcelo *Chino* Ríos, convertido en ídolo nacional tras conquistar el primer lugar del ranking ATP en 1998 sintetizó con la frase “no estoy ni ahí”. Para quienes vivieron los años de compromiso político anteriores al golpe de 1973 y para las generaciones que lucharon contra la dictadura de Pinochet, ese estado de ánimo de la sociedad aparecía como un aberrante triunfo no sólo económico sino cultural del discurso antipolítico. El descontento con la política se tradujo en envejecimiento del padrón electoral, abstencionismo, baja asociatividad, desconfianza interpersonal y hacia las instituciones y una sostenida contracción en la identificación con partidos, coaliciones e incluso con el eje izquierda-derecha. Un malestar social sin color político.

En la cúspide de la desafección, las movilizaciones del 2006 y 2011 y el Informe de Desarrollo Humano del PNUD 2015, titulado “los tiempos de la politización”, parecieran apuntar al fin de la maldición del *Chino Ríos*. Los jóvenes volverían a creer en sueños colectivos y proyectos solidarios. ¿Es correcto interpretar el fenómeno que vive el país al 2015 como un giro a la izquierda en la política chilena? ¿Estamos realmente frente a una repolitización o se trata más bien de una nueva versión del discurso de la antipolítica? Es lo que intentaré discutir en las próximas líneas a partir de una mirada a los principales hitos de los gobiernos de Bachelet I (2006-2010), Piñera (2010-2014) y Bachelet II (desde 2014), con miras a sacar algunas conclusiones sobre la última década en la política chilena.

### Chile y el giro a la izquierda

En su artículo de *Foreign Affairs* el 2006 sobre el giro a la izquierda de América Latina, Jorge Castañeda identifica dos vertientes históricas de la izquierda: una comunista convertida en socialdemócrata a partir de sus derrotas, y otra populista, autoritaria, nacionalista y más preocupada de preservar el poder que de una agenda programática. Chile, Uruguay y Brasil son sus ejemplos de renovación de la izquierda. Elogia a Lagos y a una recién inaugurada Michelle Bachelet señalando a Chile como “un verdadero modelo para la región”.

Los antiguos radicales, dice Castañeda, promueven hoy un modelo socialdemócrata y de mercado. En cambio, la izquierda populista ama el poder más que la democracia. Por eso llama a apoyar a esta buena izquierda a la chilena. Jorge Lanzaro (2011) coincide en destacar a estos tres países como las izquierdas socialdemócratas de la región, distintas del modelo populista o delegativo. Chile, Brasil y Uruguay, señala, se caracterizan por la naturaleza política de sus gobiernos, que actúan en sistemas de partidos plurales, relativamente institucionalizados, con competencia efectiva y una oposición organizada.

En la misma línea de buenas y malas izquierdas, Madrid, Weyland y Hunter (2010) sostienen que los gobiernos de izquierda moderada han sido más exitosos que aquellos más contestatarios y radicales en reducir pobreza y desigualdad, estimular el crecimiento económico y crear programas

sociales redistributivos en el marco de economías de mercado. Los ejemplos paradigmáticos son, en este caso, Brasil y Chile. Rovira 2014 advierte que el giro a la izquierda de fines de los noventa no debe inducir a la falsa impresión de que, a pesar del difícil momento que atraviesa, la derecha se ha vuelto irrelevante en América Latina. No es de extrañar su interés por la derecha a la luz de su triunfo electoral en Chile el 2010, cuando accedió democráticamente al poder por primera vez desde 1958.

¿Cuánto se asemejan los gobiernos recientes de la izquierda chilena a una socialdemocracia avanzada como la que parecen tener en mente estos autores?

A pesar de los logros de la Concertación de Partidos por la Democracia, la coalición de centro-izquierda que lideró la transición desde la dictadura de Pinochet (1973-1990), hoy resulta evidente que la sociedad chilena está pagando altos costos por la desmovilización social y la política cupular que hiciera posible su estrategia de pactos entre élites. Las dirigencias del elogiado sistema de partidos chileno se han distanciado de su base social a tal punto que éstos no pueden cumplir el papel que les corresponde como articuladores de demandas sociales.

La conversión de la otrora intransigente izquierda desde una ética de la convicción, como dice Max Weber, a una de la responsabilidad permitió la negociación con la derecha y la construcción de acuerdos amplios. Sin embargo, ese ánimo se convirtió en lo que el historiador Alfredo Jocelyn-Holt caracterizó sagazmente como un tránsito “del avanzar sin transar al transar sin parar”.

A pesar de importantes logros en reducción de la pobreza y de los esfuerzos por desarrollar políticas sociales redistributivas, la Concertación ha sido lenta en deshacer el legado institucional de la dictadura y ha sido cómplice en perpetuar la estructura neoliberal de la economía. Si esto fue tal vez justificable en sus primeros gobiernos, liderados por la Democracia Cristiana en tiempos de temor a la regresión autoritaria, se vuelve más difícil de sustentar en los gobiernos de izquierda de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet. El paso del tiempo, y el consecuente recambio generacional, juegan también un papel crucial para entender el Chile de hoy.

## Una dictadura revolucionaria

El proyecto del régimen militar fue profundamente revolucionario. Se propuso cambiar no sólo normas e instituciones sino la economía del país y su estructura y cultura política. Si bien la dictadura tuvo en sus inicios el carácter más bien estatista de todos los autoritarismos burocráticos de América Latina, sufrió tempranamente un giro hacia el modelo de libre mercado que propiciaba el economista Milton Friedman y la escuela de economía de Chicago. La influencia de los *Chicago Boys* en Chile convirtió al país en un temprano experimento en privatización, ajuste y desregulación y demostró de paso la plena compatibilidad del liberalismo económico con el autoritarismo político. El proyecto económico, que incluía entre otros temas la privatización de la educación, las pensiones y la salud y el debilitamiento de la capacidad negociadora de los sindicatos, quedó plasmado en *El Ladrillo*, texto base de la política económica del régimen militar.

En julio de 1977, en un discurso pronunciado en el cerro Chacarillas, Pinochet anunció los lineamientos de su proyecto refundacional inspirado en el gremialismo y el neoliberalismo: construir una nueva forma de democracia “autoritaria, protegida, integradora, tecnificada y de auténtica participación social”. Para lograrlo, se generaron múltiples instituciones que entrarían a regir una vez superado el periodo de crisis y cuando fuese restablecida la democracia electoral. La principal de ellas fue la Constitución de 1980. Esta nueva carta fundamental no entró en vigencia tras su promulgación, sino que quedó supeditada a una serie de artículos transitorios. Era, en otras palabras, un documento diseñado para cuando las Fuerzas Armadas decidieran abandonar la conducción política del país y llamar de regreso al Congreso y a ciertos partidos políticos.

La Constitución de 1980, aún vigente, fue diseñada principalmente por Pinochet y su asesor, el jurista y fundador del partido gremialista Unión Demócrata Independiente (UDI), Jaime Guzmán. Incluye una extraordinaria concentración de mecanismos supramayoritarios que, combinados con el sistema electoral binominal, hicieron virtualmente imposible cualquier modificación sustantiva sin la venia de los herederos políticos de la dictadura: los partidos UDI y Renovación Nacional (RN).

Adicionalmente, la carta constitucionalizó un amplio grupo de temas con el fin de garantizar su inmutabilidad. Se crearon así 18 Leyes Orgá-

nicas Constitucionales entre las que se incluyen normas sobre educación, sistema electoral, partidos políticos, funcionamiento del Banco Central, concesiones mineras o Fuerzas Armadas y Carabineros, por mencionar sólo algunas. Para cambiar una de estas leyes se necesita el voto de 4/7 de los parlamentarios en ejercicio en el Congreso Nacional. Estas características, sumadas al papel del Tribunal Constitucional, han sido calificadas por el abogado Fernando Atria como “cerrojos” de una “constitución tramposa” que da la espalda a la voluntad de la mayoría. La Constitución asegura una inclinación al *statu quo* y da poder de veto de la derecha política.

Parte del precio a pagar por los pactos que hicieron posible la transición gradual y pacífica a la democracia fue este legado institucional. Los primeros gobiernos de la Concertación pusieron sus esfuerzos en superar las amenazas de regresión autoritaria. Buscaron subordinar las Fuerzas Armadas al poder civil democrático en un contexto en que Pinochet seguía siendo un actor clave, como comandante en jefe del Ejército primero y como senador vitalicio más tarde, hasta su arresto en Londres en 1998. Centrales fueron los esfuerzos por superar la división social y política que dejaron las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado a través de medidas de justicia transicional enmarcadas en conceptos como reconciliación nacional, reparación y memoria.

La Concertación, formada por los partidos Radical Socialdemócrata (PR), Por la Democracia (PPD), Socialista (PS) y Demócrata Cristiano (PDC), logró gradualmente reducir el legado institucional del autoritarismo. En negociaciones realizadas en los meses que transcurrieron entre la derrota de Pinochet en el plebiscito de octubre de 1988 y la elección de Patricio Aylwin en diciembre de 1989, líderes de los grupos entrantes y salientes del gobierno llegaron a un acuerdo sobre un conjunto de reformas constitucionales mínimas ratificadas por un plebiscito en 1989. Dos años más tarde se restableció la elección popular de alcaldes y concejales. Sin embargo, ya en su segundo gobierno la Concertación enfrentó un importante debate interno entre quienes reivindicaban el curso que estaba tomado la transición y quienes consideraban insuficientes los esfuerzos hacia mayores niveles de inclusión y democracia.

Los gobiernos de la Concertación encabezados por Patricio Aylwin (PDC, 1990-1994), Eduardo Frei (PDC, 1994-2000) y Ricardo Lagos (PPD-PS, 2000-2006) lograron avanzar en políticas sociales focalizadas

sin desafiar, en lo fundamental, la relación entre Estado y mercado diseñada por la dictadura. El año 2005, Ricardo Lagos estampó su firma en la Constitución de 1980 tras una reforma que terminó con importantes enclaves de la dictadura que no habían sido tocados en 1989. Se eliminaron los senadores designados, la injerencia política de las Fuerzas Armadas a través del Consejo de Seguridad Nacional y la incapacidad presidencial de destituir a sus mandos, entre otras materias. Esta reforma, aclamada por algunos como el cierre definitivo de la transición, dio sin embargo paso a un nuevo escenario político que puso en evidencia un sordo proceso de cambio que se venía gestando en la sociedad chilena. En lugar de disminuir, aumentaron las propuestas de reforma constitucional. Los partidos y las coaliciones políticas mostraron un fenómeno nuevo por el cual algunos parlamentarios díscolos desobedecían a sus cúpulas y salían a marchar a la calle en contra de políticas de su propio gobierno.

Poco a poco se hizo incuestionable la gravedad de la crítica social hacia las élites y sus mecanismos de toma de decisiones. Al interior de la Concertación había surgido a mediados de los noventa un debate entre autocomplacientes y autoflagelantes, las llamadas dos almas del conglomerado político, donde los primeros enfatizaban los logros y los segundos la promesa incumplida en el tránsito hacia una sociedad plenamente democrática y más equitativa. El año 2002 Tomás Moulián logró un inesperado éxito de ventas con el libro *Chile actual. Anatomía de un mito* que, desde la izquierda, denunciaba como “transformismo” las políticas de la Concertación y el creciente endeudamiento que hacía posible el supuesto milagro económico chileno. El 2013, a la luz de las manifestaciones del 2011, Alberto Mayol volvió a convertir un texto sociológico en superventas cuando argumentó, en *El derrumbe del modelo*, que existe una conexión íntima entre la crisis de legitimidad política y el malestar con un esquema económico marcado por el endeudamiento, la desprotección y los abusos.

### **Del “no estoy ni ahí” al “que se vayan todos”**

La llegada al poder de Michelle Bachelet a la cabeza del cuarto gobierno de la Concertación (2006-2010) tuvo visos de continuidad. Bachelet es una histórica militante socialista, hija del general de la Fuerza Aérea Alberto

Bachelet quien murió en prisión en 1974 por mantenerse leal al gobierno de Salvador Allende. No se trata, pues, de una figura ajena a los partidos y a la historia política reciente. Sin embargo, su liderazgo marcó un quiebre con las cúpulas y la forma de hacer política de la Concertación. Bachelet no era, como Aylwin, Frei y Lagos, una carta presidencial predecible. Había tenido un papel secundario desde su regreso del exilio a fines de los setenta hasta su nombramiento por Ricardo Lagos como ministra de Salud en 2000 y de Defensa en 2002. Este último puesto, que por primera vez era ocupado por una mujer, tuvo un simbolismo adicional al ser ella una víctima directa de la violencia de Estado e hija del emblemático general Bachelet. En tiempos en que la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder político civil seguía siendo un tema sensible, fue este ministerio el que la catapultó a la figuración pública.

Su contundente triunfo electoral (46% en primera vuelta y 53.5% en segunda) reflejó una voluntad de cambio del electorado. Atributos personales como cercanía y credibilidad parecen haber jugado un papel al menos tan importante como la acción de los partidos políticos en su llegada a La Moneda. No sólo fue la primera mujer presidenta, sino la primera que se impuso desde la ciudadanía a las cúpulas partidarias. Prometió incorporar nuevos rostros a la política y romper las lógicas elitistas para hacer una política más ciudadana. Su primer gabinete incorporó mujeres como nunca antes en la historia de Chile, mientras consideraba menos la preferencia de los presidentes de los partidos. Bachelet, la primera mujer presidenta de Chile, llegó al poder con una promesa de gobierno ciudadano muy diferente de su antecesor, el también socialista Ricardo Lagos.

Dos meses después, la ciudadanía le cobró de manera inusitada la palabra, cuando los secundarios se volcaron a las calles en un movimiento de protesta que generó una adhesión y efectos políticos sin precedentes. A pesar de una evidente continuidad política con Lagos, el gobierno de Bachelet tuvo una impronta más social y menos política que el de su antecesor. Lagos logró consensuar con la derecha las reformas constitucionales de 2005, en una maniobra típica de la astucia negociadora de los líderes de la Concertación. Fue bajo la presidencia de Lagos que salieron a la luz escándalos de corrupción vinculados al pago de sobresueldos de funcionarios públicos y al financiamiento de campañas políticas con fondos estatales. A partir de estos escándalos se produjo una negociación entre la Concertación y



la Alianza que llevó a establecer el año 2003 el Sistema de Alta Dirección Pública, un intento por reducir el cuoteo político y profesionalizar la asignación de altos cargos públicos.

Bachelet, en cambio, destacó en su primer periodo por reformas sociales y transferencias directas a sectores vulnerables. La reforma previsional aprobada el 2008 introdujo un suplemento estatal para las pensiones más bajas del sistema privado de pensiones. También estableció el pago de algunos bonos. Aprobó el programa de apoyo a la primera infancia *Chile Crece Contigo*, el fortalecimiento de derechos laborales y el aumento de la cobertura pública de salud a través de la incorporación de nuevas enfermedades al Plan AUGE. En educación, amplió el sistema de becas y se reemplazó la Ley Orgánica Constitucional de Educación LOCE por la Ley General de Educación luego de las intensas movilizaciones de los secundarios. Se aprobó una ley sobre transparencia y acceso a la información pública y se creó el Ministerio del Medio Ambiente. En materia de derechos humanos se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos y el Museo de la Memoria.

Aunque Bachelet llegó al poder con un apoyo sustantivo, su gobierno fue el último de la era de la Concertación. El 2010 la presidenta entregó el mando a Sebastián Piñera, el primer presidente de derecha en ganar una elección presidencial desde 1958. Posteriormente, Bachelet regresó al poder para un segundo periodo en 2014 incorporando por primera vez al Partido Comunista en su coalición, rebautizada como Nueva Mayoría.

Para quienes consideraban que, tras dos años de presidencias socialistas, el país estaba embarcado en lo mejor del giro a la izquierda de la región –en la línea no populista sino pro-mercado o socialdemócrata– la derrota de la Concertación el 2009 fue un balde de agua fría.

Si los gobiernos de la Concertación 1990-2010 se consideran parte del giro a la izquierda en América Latina, la llegada al poder de una coalición de derecha con Sebastián Piñera el 2010 podría ser interpretada como un nuevo giro a la derecha, en sintonía con los escasos gobiernos de este signo en la región. Sin embargo, más que un cambio de esa naturaleza, el triunfo de la derecha fue signo del desgaste de la Concertación y el distanciamiento creciente entre plataformas políticas y partidos.

El liderazgo carismático de Bachelet no logró traspasarse al candidato de su sector, el expresidente Eduardo Frei. Por el contrario, su distanciamiento de las cúpulas partidarias se tradujo en la imposibilidad de mantener la dis-

ciplina interna y en el abandono de algunos de sus miembros que formaron pequeños partidos, como Chile Primero y el Partido Regionalista Independiente (PRI) y apoyaron a la derecha. Debido a la incorporación de estos grupos, la Alianza por Chile (UDI y RN) cambió su nombre a Coalición por el Cambio en vísperas de las elecciones.

Si Bachelet había simbolizado el cambio respecto de los dirigentes tradicionales de la Concertación, la elección de Piñera fue fruto de un rechazo generalizado a los gobernantes en el poder. A pesar de haber llevado por primera vez a la UDI y RN al poder, su programa de gobierno no difirió sustancialmente de aquellos de la Concertación respecto de la relación entre Estado y mercado, la entrega de transferencias directas focalizadas en grupos vulnerables o las normas sobre discriminación.

Aunque algunos señalan que se trató de una suerte de “quinto gobierno de la Concertación” por la falta de un claro giro a la derecha, hay quienes argumentan que sí fue visible una reducción de programas sociales, por ejemplo en salud. Como sea, se entregaron, como el gobierno anterior, varios bonos además de una compensación salarial llamada “ingreso ético familiar”; se dictaron leyes que otorgaban becas para la formación de profesores, reprogramación de deudas y reducción de los intereses en los créditos estudiantiles. Se aprobó una modesta reforma tributaria para recaudar fondos destinados a educación, subsidios a la vivienda, eliminación de las cotizaciones de salud de los pensionados más vulnerables, el postnatal de seis meses, una ampliación del Plan de salud AUGE y la obligatoriedad de la educación preescolar de kínder.

Aunque la reforma al sistema electoral terminó con el voto obligatorio en Chile bajo el gobierno de Piñera, la ley de inscripción automática y voto voluntario había sido promovida por la Concertación y contó con el apoyo transversal de representantes de distintos sectores políticos, mucho de ellos hoy arrepentidos frente a resultados que no revirtieron el creciente abstencionismo. También se aprobó en este periodo una ley de elecciones primarias voluntarias orientada a democratizar la selección de candidatos a cargos parlamentarios al interior de los partidos. Esta norma ha sido cuestionada por sus efectos adversos respecto del papel del dinero en la movilización de los votantes y por no ser obligatoria.

Inspirada por una violenta agresión que terminó con el asesinato de un joven homosexual, en 2012 se promulgó una ley antidiscriminación cono-

cida como Ley Zamudio y se promovió la regulación de la convivencia de parejas hecho que derivó, en el gobierno siguiente, en la promulgación de la ley sobre acuerdo de unión civil, en 2015.

En todos estos ámbitos, el gobierno de derecha no marcó grandes diferencias respecto de sus antecesores. La estrategia de campaña de Sebastián Piñera había sido acercarse al voto de centro, destacando que su padre fue un empleado público militante de la DC y que él mismo estuvo entre los escasos miembros de la derecha que votó contra la continuidad del régimen de Pinochet en el plebiscito de 1988.

El gobierno de la Coalición por el Cambio buscó marcar una diferencia con la Concertación en el ámbito de la seguridad pública. Se señaló que los gobiernos de centroizquierda habían tenido mano blanda con la delincuencia y promovido un sistema judicial excesivamente garantista, tildado de “puerta giratoria” porque los detenidos entran y salen sin sufrir las condenas adecuadas a sus delitos. Ello a pesar de que el país tiene una tasa de encarcelamiento alta para estándares regionales. La agenda de mano dura llevó a la aprobación de leyes sobre seguridad pública que incluyeron la ampliación de la planta de Carabineros y la Policía de Investigaciones y normas más duras contra quienes atacasen a miembros de las fuerzas de orden y seguridad pública durante manifestaciones. La manera en que el gobierno enfocó este tema, criticando en ocasiones los fallos de la justicia a través de la prensa, llevó a varias situaciones de tensión entre los poderes ejecutivo y judicial.

Durante el gobierno de Piñera continuó el éxodo de políticos tanto desde la Concertación como de la Alianza, con la formación de grupos como Evópoli y Amplitud, en la derecha, y Revolución Democrática en la izquierda. Las elecciones municipales del año 2012 llamaron la atención de los analistas por la casi absoluta ausencia de los logos de partidos y coaliciones en la gráfica de los anuncios que inundaron las ciudades del país. Ningún candidato quería aparecer vinculado a la política tradicional. El sistema de partidos chilenos, alguna vez elogiado por su alta institucionalización y contenido programático, había alcanzado un nuevo nivel de rechazo ciudadano.

A pesar de una situación económica favorable, bajo desempleo y un positivo balance de las tareas de reconstrucción por los efectos del terremoto y maremoto del año 2010, el gobierno de Sebastián Piñera tuvo que

lidar con encuestas que arrojaban bajas tasas de aprobación ciudadana y constantes movilizaciones sociales, partiendo por la emblemática acción estudiantil el 2011.

Bachelet regresó a la presidencia el 2014 con una agenda que intentaba recoger este descontento. Su segundo gobierno enfrentó un escenario distinto a los de la Concertación. Martner 2014 lo caracterizó como un giro a la izquierda en Chile y el informe de desarrollo humano del PNUD llamó al 2015 los tiempos de la politización.

Con un contundente apoyo del 62%, Bachelet llegó a La Moneda al frente de una coalición ampliada hacia la izquierda para incluir al Partido Comunista –lo que hizo que la ex Concertación pasara a llamarse Nueva Mayoría– y el primer congreso con mayorías suficientes en ambas cámaras para aprobar varias iniciativas pendientes.

La elección presidencial y parlamentaria del 17 de noviembre de 2013 fue la primera con voto voluntario e inscripción automática. La Nueva Mayoría obtuvo 67 de las 120 plazas en la Cámara de Diputados y 21 de las 38 en el Senado, una mayoría parlamentaria sin precedente desde el retorno a la democracia. En la segunda vuelta presidencial, el 15 de diciembre de 2013, Bachelet obtuvo el 62% de las preferencias, un aumento considerable en comparación con el 53.5% de 2005. Sin embargo, esta cifra positiva en términos porcentuales se obtuvo con un menor número de votos absolutos, que pasaron de 3 723 019 en la segunda vuelta de 2006 a 3 470 055 en la segunda vuelta el 2013.

Es claro que la instauración del voto voluntario no frenó el creciente abstencionismo electoral. Los niveles de participación fueron los más bajos del periodo postautoritario, hecho que según Mardones y Toro (2014) genera cuestionamientos sobre la legitimidad del sistema y la conveniencia de mantener la voluntariedad del voto.

El holgado triunfo electoral y el ambicioso programa de Bachelet aumentaron como nunca desde el regreso de la democracia las expectativas de cambio. El programa incluía tres ejes centrales que debían iniciar de inmediato su discusión: reforma tributaria, educacional y constitucional. La primera estaba orientada a obtener recursos para fortalecer la educación pública a nivel escolar y universitario. La reforma constitucional apuntaba a superar la ilegitimidad de origen de la Constitución de 1980 a través de un mecanismo democrático, institucional y participativo.

A comienzos de 2014 Gonzalo Martner afirmaba con optimismo que los resultados electorales generaban condiciones políticas e institucionales con las que ningún otro presidente había contado en el Chile de la posdictadura. Por primera vez estaban las mayorías necesarias para legislar sin la venia de la derecha en varias materias, incluso bajo las normas del sistema electoral binominal. Martner sugirió que la derecha estaba distanciada de la sociedad: “¿Está la derecha, con su 38% de los votos de 2013 (el porcentaje más bajo desde el 35% de 1993 y el 36% de 1970), distanciada de los valores y aspiraciones de la sociedad chilena contemporánea, lo que explicaría que en solo cuatro años perdiera 1.5 millón de votos? ¿Constituye definitivamente una minoría sociológica?” (Martner 2014)

El ánimo de triunfo de la izquierda quedó plasmado en la idea de la “retroexcavadora” acuñada en marzo de 2014 por el senador de PPD Jaime Quintana, entonces vocero de la Nueva Mayoría. Al ser consultado por el retiro del Congreso de algunos proyectos de ley en materia educacional presentados por Piñera y las quejas de la derecha en el sentido de que le estarían pasando la aplanadora, Quintana respondió: “Nosotros no vamos a pasar una aplanadora, vamos a poner aquí una retroexcavadora, porque hay que destruir los cimientos anquilosados del modelo neoliberal de la dictadura. El lucro, la selección, la discriminación y la mala calidad”. Con lo último se refería a la reforma educacional, la segunda de las prioridades programáticas del programa de gobierno. En la misma declaración, afirmó que “no tenemos matices con la derecha, tenemos ideas completamente distintas y, en mi opinión, irreconciliables”.

A poco andar, sin embargo, la reforma educacional comenzó a enfrentar dificultades por la profunda resistencia que generaba en algunos actores la eliminación del lucro en la educación escolar y universitaria. El debate sobre la reforma constitucional se dilató y se introdujo como prioritaria una modificación a las relaciones laborales. El debate constitucional fue asumido con seriedad por todos los sectores y con una especial preocupación por la incertidumbre jurídica y el derecho de propiedad por la derecha. Sin embargo, hasta mediados de 2015 ha tenido más discusión académica que política.

Tras las esperanzas y expectativas de comienzos del gobierno, Bachelet sufrió un duro revés con una seguidilla de escándalos sobre financiamiento de la política que, a pesar de afectar en un comienzo a la UDI, terminaron

salpicando a todo el sistema político. Los casos PENTA y SOQUIMICH sobre evasión tributaria y financiamiento ilegal de actividades de campaña de la Nueva Mayoría se sumaron al abuso de influencia por un crédito bancario otorgado a la nuera de la presidenta para un negocio de especulación sobre uso de suelos. El apoyo presidencial se desplomó.

En un intento por recuperar la adhesión del centro, especialmente de la DC al interior de su coalición, la presidenta realizó en mayo de 2015 un cambio de timón en su equipo político instalando al DC Jorge Burgos en el Ministerio del Interior. La maniobra fue interpretada por la prensa como el fin de la retroexcavadora.

La eliminación en 2015 del sistema electoral binominal y su reemplazo por uno proporcional, bandera de lucha de casi un cuarto de siglo, generó escaso interés en la opinión pública. Algo más de entusiasmo hubo por el acuerdo de unión civil o por el sistema de protección financiera para diagnósticos y tratamientos de alto costo, conocido como Ley Ricarte Soto. El ánimo político a sólo un año de gobierno ha pasado del entusiasmo al pesimismo y el capital político de la Nueva Mayoría se ha visto severamente mermado por los escándalos de corrupción.

## Conclusiones

La crisis de desafección y legitimidad que aqueja al sistema político chileno se ha traducido, en la última década, en nuevas formas de participación y protesta a través de movimientos sociales. Esto plantea serias interrogantes sobre la efectividad con que las elecciones, los partidos y el Congreso Nacional realizan su tarea de representar la voluntad ciudadana. Enclaves institucionales de la dictadura, especialmente la Constitución de 1980, y un modelo económico percibido como injusto y abusivo alimentan el malestar social y la desafección.

El movimiento social ha sido, hasta hoy, exitoso en sacar a la luz estas deficiencias. Sin embargo, una cosa es incorporar temas a la agenda política y otra muy distinta generar espacios de diálogo y deliberación que permitan convertir las demandas en propuestas efectivas. Para lo último, no se ha inventado hasta hoy un mecanismo democrático que reemplace el papel de los partidos, la discusión legislativa, el debate público a través de una prensa

pluralista y los organismos de la sociedad civil. Todos estos elementos son necesarios para combinar la representación política con efectivos mecanismos de rendición de cuentas y participación social.

Aunque la Concertación fue exitosa en liderar el cambio de régimen del autoritarismo a la democracia, no ha logrado construir un proyecto político capaz de canalizar la voluntad popular. Esta es la paradoja del modelo elitista de la transición chilena, como afirman Sehnbruch y Siavelis:

El mismo modelo que permitió el éxito de la transición fue el semillero de poca efectividad en sus gobiernos. Aunque las élites políticas estuvieran al centro del éxito de la transición, su persistencia en estas lógicas ha perjudicado la consolidación de la democracia en el largo plazo, pues los chilenos comunes y corrientes perciben la política como un juego de negociaciones y acuerdos entre élites cuya legitimidad es cuestionable (Sehnbruch y Siavelis 2014, 300).

Si en los primeros gobiernos de la Concertación esto pudo tener cierta justificación con el miedo al retorno del autoritarismo, ese argumento no convence a las nuevas generaciones que crecieron en democracia. ¿Por qué no avanzaron más en las reformas estructurales los gobiernos del ala izquierda de la Concertación? Para Pribble, Stephens y Huber (2010) hay cuatro elementos que explican la moderación de los gobiernos de Lagos y Bachelet 2000-2010: el legado institucional de Pinochet, el “aprendizaje político” de las élites partidarias de la izquierda, la debilidad organizacional de sus partidos y el haber sido gobiernos de coalición. Estos factores habrían limitado su capacidad de acción. Tras el gobierno de Piñera, cuando el desgaste de la democracia de los consensos ya era evidente para toda la clase política, Bachelet quiso poner el acelerador a las reformas. Es temprano para evaluar el resultado. Sin embargo, los escollos que ha encontrado y la explosión de escándalos que afecta a la clase política auguran un resultado poco promisorio.

Bachelet ha intentado hacer frente a la situación planteando una agenda legislativa para mejorar el funcionamiento de los partidos y el papel del dinero en la política. Sin embargo, las propias cúpulas partidarias son reacias a ceder sus cuotas de poder para permitir nuevos aires en la política chilena.

No hay duda que el sistema político está cambiando. La pérdida de disciplina partidaria apunta al deterioro del resistente clivaje del “sí” y el “no”, la división entre adherentes y detractores de Pinochet en el plebiscito de

1988 que se ha perpetuado a través de la Concertación y la Alianza. Algunos políticos han apostado por crear nuevos movimientos para desafiar el duopolio de estas coaliciones. Sectores del movimiento estudiantil intentan convertirse en referentes políticos estables. El fin del binominal agudizará este cambio de escenario. Las movilizaciones sociales de la última década tienen, sin duda, un componente de reclamo por cambio político que podría interpretarse como un giro a la izquierda, como un rechazo a los enclaves dictatoriales y la política de los acuerdos. Pero tienen, también, un componente de rechazo a la política en su conjunto, a las élites y las instituciones.

Lanzaro situaba a Chile entre los países con sistema de partidos plurales y relativamente institucionalizados. La crisis política actual hace razonable preguntarse si esto es efectivo o si el sistema está en peligro de desmoronarse. Algunos creen que la desafección política va hacia la desintegración institucional, una suerte de paso del “no estoy ni ahí” de los noventa al “que se vayan todos” de la Argentina de la crisis de 2001. Para otros, la actual situación es una oportunidad de renovar la política y realizar por fin los cambios que el país requiere para permitir la participación efectiva de la ciudadanía en las decisiones políticas.

La superación de la crisis de legitimidad requiere construir vasos comunicantes entre sociedad e instituciones políticas. Los principales obstáculos para que eso ocurra son el temor al cambio y el rechazo de ciertos actores a ceder posiciones de privilegio y poder en aras de un proceso más democrático e inclusivo para la toma de decisiones. La política chilena debe obedecer a la voluntad popular y ser permeable a sus distintas formas de expresión. Sólo esto garantizará que las decisiones públicas sean fruto de un proceso democrático y participativo capaz de concitar la adhesión de los distintos sectores de la ciudadanía.

## Bibliografía

- CASTAÑEDA, Jorge (2006). “Latin America’s Left Turn”, *Foreign Affairs* núm. 85-3 (junio), 28,43.
- EL MERCURIO, 25 marzo 2014. “Senador Jaime Quintana: ‘No vamos a pasar la aplanadora, sino a poner una retroexcavadora. Hay que destruir los cimientos del modelo neoliberal’”.



- HEISS, Claudia y Patricio Navia (2007). "You win some, you lose some: constitutional reforms in Chile's transition to democracy", *Latin American Politics and Society*, vol. 49-3 (otoño), 163-190.
- JOCELYN-HOLT, Alfredo (1998). *El Chile perplejo: Del avanzar sin transar al transar sin parar*. Santiago, Ariel.
- LANZARO, Jorge (2011). "Izquierdas y derechas gobernantes en América Latina", *LasaForum* vol. XLII: 3 (verano).
- MADRID, Raúl; Kurt Weyland y Wendy Hunter (2010). *Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings*. Nueva York, Cambridge University.
- MARDONES, Roberto y Sergio Toro (2014). "Chile frente al cambio de ciclo. Participación y preferencias electorales en las elecciones chilenas de 2013", *Nueva Sociedad*, núm. 249 (febrero), 16-27.
- MARTNER, Gonzalo (2014). "¿Un giro a la izquierda en Chile?", *Nueva Sociedad*, núm. 249 (febrero), 28-33.
- PINOCHET, Augusto. 1977. "Discurso en Cerro Chacarillas con ocasión del Día de la Juventud, el 9 de julio de 1977" en *Nueva institucionalidad en Chile: Discursos de S.E. el Presidente de la República General de Ejército D. Augusto Pinochet Ugarte*, pp. 12-15.
- PNUD (2015). *Informe sobre Desarrollo Humano 2015. "Los tiempos de la politización"*. Santiago: PNUD, Abril.
- PRIBBLE, Jennifer; Evelyne Huber y John D. Stephens (2010). "The Chilean Left in Power: Achievements, Failures, and Omissions" en Raúl Madrid, Kurt Weyland y Wendy Hunter (editors), *Leftist Governments in Latin America: Successes and Shortcomings*. Nueva York, Cambridge University.
- PROGRAMA DE GOBIERNO 2014-2018 Michelle Bachelet. Disponible en: <<http://michellebachelet.cl/programa/>>.
- ROVIRA, Cristóbal (2014). "La Derecha en América Latina y su lucha contra la adversidad", *Nueva Sociedad*, núm. 254 (noviembre-diciembre).
- SEHNBRUCH, Kirsten y Peter Siavelis (2014). *El Balance. Política y políticas de la Concertación 1990-2010*. Santiago, Catalonia.